

Santiago, doce de julio de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado don Christopher Salazar Dunn, en representación de doña Eva Lozada, demandante en autos sobre declaración de relación laboral, despido injustificado, nulidad del mismo y cobro de prestaciones, Rit M-1829-2024, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, dedujo recurso de queja en contra de los miembros de una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, ministros señor Jaime Balmaceda Errázuriz, señor Alejandro Aguilar Brevis y abogado integrante señor Jorge Benítez Urrutia, quienes con fecha 28 de mayo de 2024, confirmaron la resolución apelada que declaró la caducidad de la acción de despido injustificado.

Manifiesta que la decisión objetada fue pronunciada con falta o abuso, al aplicar el artículo 168 del Código del Trabajo a un caso para el que no se encuentra previsto y que debió ser resuelto en conformidad al artículo 510; pues se cuestionó que se interpusiera la demanda al día sesenta y dos hábil desde la separación, aun considerada la suspensión del término legal durante la gestión administrativa, sin tener presente que el primer objetivo de la acción es que se declare la relación laboral habida entre su representada y el Condominio Edificio Alto Las Rejas II, entre el 12 de septiembre de 2021 y el 8 de enero de 2024, siendo en ese contexto que se persiguen las indemnizaciones y prestaciones que indica, por lo que debió acudirse a los plazos de prescripción consagrados en el referido artículo 510, que no contempla ninguno específico respecto de la acción de reconocimiento de relación laboral, la que, por consiguiente, queda regida por el término general de dos años. Misma conclusión a que arribó la Corte Suprema en sentencia dictada en los autos rol N°1994-2022, entre otras que cita, en las que se decidió que no procedía aplicar la regla sobre caducidad invocada en el caso, pues el plazo para reclamar las indemnizaciones y otras prestaciones laborales nacen al momento en que finaliza la relación laboral.

Solicita se acoja el recurso y, por consiguiente, se deje sin efecto la resolución impugnada y se dicte en su reemplazo una que revoque la apelada.

Segundo: Que, al evacuar el informe de rigor, los recurridos señalaron que efectivamente dictaron la resolución impugnada, que discrepa del criterio esgrimido por el recurrente, pues el artículo 168 del Código del Trabajo establece un plazo preciso para deducir la acción de despido injustificado, que sólo puede ser suspendido con motivo del reclamo intentado por el trabajador despedido en sede administrativa, por lo que estiman no haber incurrido en la falta o abuso que se denuncia.



Tercero: Que el recurso de queja se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de "Las facultades disciplinarias".

Cuarto: Que, conforme al artículo 545 de ese cuerpo legal, el recurso de queja solamente procede cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en falta o abuso constituidos por errores u omisiones, manifiestos y graves.

Quinto: Que, al efecto, es importante considerar que el concepto que introduce el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, en orden a que el recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir "faltas o abusos graves" cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional, está íntimamente relacionado con el principio elaborado por la doctrina procesal de la "trascendencia", y que, en el caso concreto, dice relación con la necesidad de que la falta o abuso tenga una influencia sustancial, esencial, trascendente en la parte dispositiva de la sentencia (Barahona Avendaño, José Miguel, El recurso de queja. Una Interpretación Funcional, Editorial Lexis Nexis, 1998, p. 40); situación que puede configurarse, por ejemplo, cuando por un incorrecto análisis de los antecedentes del proceso y de la normativa aplicable se priva a una parte del derecho a un debido proceso o a la tutela judicial efectiva.

Sexto: Que, del examen de los antecedentes obtenidos del sistema computacional se advierte que:

a.- El 23 de abril de 2024, doña Eva Lozada interpuso demanda de declaración de relación laboral, despido injustificado, nulidad del mismo y cobro de prestaciones en contra de Condominio Edificio Alto Las Rejas II; fundada en que ingresó a prestar servicios el 12 de septiembre de 2021, los que no fueron formalizados a través de la suscripción del respectivo contrato, siendo despedida en forma verbal el 8 de enero de 2024.

b.- La demandante interpuso reclamo administrativo con fecha 27 de febrero de 2024, siendo citadas las partes a un comparendo celebrado el día 28 de marzo del mismo año, al que la demandada no se presentó.

c.- La judicatura de instancia, al proveer la demanda, declaró la caducidad de la acción de despido injustificado, teniendo en consideración que entre la fecha del despido y la de interposición de la demanda, transcurrió un plazo que excede de los sesenta días hábiles a que alude el artículo 162 del Código del Trabajo, aún descontado el período correspondiente a la gestión administrativa.

d.- La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución precedente, por sentencia de 28 de mayo de 2024.



Séptimo: Que, como consta de la resolución impugnada y de los antecedentes del proceso, la demanda tiene por objeto que se declare la relación laboral. Tal precisión resulta relevante en cuanto no es jurídicamente posible separar la acción de despido injustificado de la anterior, al ser evidente que no puede solicitarse la aplicación de lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo, ni de ninguno de sus preceptos, respecto de un período cuya naturaleza laboral está controvertida y que aún no ha sido asentada por la judicatura del ramo.

Por consiguiente, la acción de despido injustificado derivada de un vínculo cuya real naturaleza forma parte del conflicto sometido al conocimiento de la judicatura laboral, queda supeditada, en los aspectos sustantivos y adjetivos, incluido el plazo para su interposición, a la acción de declaración de relación laboral, pues no puede existir en forma independiente de aquella.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, esta Corte se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sosteniendo que el plazo de prescripción de la acción para la declaración de una relación laboral es de dos años y que se contabiliza desde el término del vínculo. Así lo ha dicho en las sentencias dictadas en las causas Rol N° 43766-2017, 43763-2017, entre otras, y más recientemente, en los antecedentes N° 104276-2020, 45058-2021 y 1994-2022, en la última de las cuales se razonó que “no es dable exigirle (al trabajador) que deduzca su acción de reconocimiento de la relación como laboral, bajo subordinación y dependencia, durante la vigencia de la misma al verse expuesto a represalias por parte del empleador e incluso el término de la relación laboral decidida por éste último, pudiendo terminar con la pérdida de su fuente de trabajo y las prestaciones alimentarias que derivan de la ésta.

Por consiguiente, se reitera el criterio conforme al cual el derecho a reclamar el reconocimiento de una relación laboral que es desconocida por el empleador puede ser impetrada no sólo durante toda su vigencia, sino también después de su finalización, pero en ambos casos, el plazo de prescripción de la acción sólo puede comenzar a correr desde la época en que se le puso término, ello, según la correcta interpretación del inciso primero del artículo 510 del cuerpo legal citado”; mismo criterio que motiva las decisiones anteriores.

Noveno: Que, en consecuencia, los jueces recurridos incurrieron en falta o abuso al aplicar el plazo de caducidad de la acción de despido injustificado del artículo 168 del Código Laboral, sin considerar que, en la especie, su ejercicio se encuentra supeditado a aquella que tiene por objeto una declaración judicial relativa a la verdadera naturaleza del vínculo, respecto de la cual se desprende que el término para plantearla era el de dos años desde la conclusión de los



servicios, mismo que, por consiguiente, debe extenderse a la acción de despido injustificado que tiene como fundamento y antecedente esa controversia previa.

Por estas consideraciones y conforme lo dispone el artículo 549 del Código Orgánico de Tribunales, **se acoge** el recurso de queja deducido en contra de los integrantes de la Corte de Apelaciones de Santiago, ministros señor Jaime Balmaceda Errázuriz, señor Alejandro Aguilar Brevis y abogado integrante señor Jorge Benítez Urrutia, por haber dictado con falta o abuso la resolución de veintiocho de mayo último, y, en consecuencia, se la deja sin efecto y se decide, conforme lo previamente razonado, que **se revoca** la sentencia interlocutoria de veintiséis de abril del año en curso, dictada en los autos RIT M-1829-2024 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por lo que se ordena proveer la demanda y dar curso progresivo a los autos, citando a la respectiva audiencia preparatoria.

No se ordena pasar estos antecedentes al Tribunal Pleno, por no existir mérito suficiente para ello.

Acordada con el **voto en contra** de la ministra **señora Melo**, quien fue de opinión de rechazar el presente recurso, por estimar que cuestiona el sentido y alcance que los recurridos otorgaron a la disposición que regula la acción de despido injustificado y el plazo para interponerla, en circunstancias que el proceso de interpretación de la ley que lleva a cabo la judicatura en cumplimiento de su cometido no puede ser revisado por la vía del recurso de queja, porque constituye una labor fundamental, propia y privativa de aquellos, salvo que se constate una violación evidente y manifiesta en dicha actividad, que por su entidad y arbitrariedad, configure una falta o abuso que deba ser enmendada, cuestión que en la especie no concurre, constituyendo el presente arbitrio, en definitiva, una mera expresión de la disconformidad del recurrente, que no es controlable por esta vía.

Regístrese y archívese.

N° 19.092-24.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los ministros señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., María Soledad Melo L., y las abogadas integrantes señoras Fabiola Lathrop G., e Irene Rojas M. No firma la ministra señora Muñoz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso. Santiago, doce de julio de dos mil veinticuatro.





En Santiago, a doce de julio de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

